

Comer es un acto político.

Eso es lo que nos recuerdan las protestas campesinas y las campañas urbanas que las apoyan, como #YoMePongoLaRuana en Twitter.

Por primera vez en mucho tiempo, los ciudadanos nos damos cuenta de que el olvidado campo —con sus pobrezas y sus guerras— nos afecta directamente. Asistimos a la revuelta de los que producen sigilosamente lo que hemos comido toda la vida: papas boyacenses, café quindiano, arroz huilense, leche de vacas alimentadas con pasto natural. Descubrimos no sólo que ellos se están quebrando, sino que nosotros estamos consumiendo algo muy distinto: papas congeladas holandesas, maíz transgénico y pollo de granja industrial de EE.UU., leche en polvo de Nestlé.

Detrás de la cadena alimenticia, está la cadena política y económica. La que conecta la decisión de los gobiernos que firmaron los TLC sin apoyar a los campesinos para prepararse para lo que vendría, las decisiones de inversión de los beneficiarios (los grandes productores como Cargill, que trae comida procesada a la vez que acumula tierra en la Orinoquia), y las decisiones de compra de quienes consumimos al final de la cadena, en los supermercados.

“Qué y cómo comemos determina, en gran medida, el uso que hacemos del mundo, y qué pasará con él”, escribe Michael Pollan en *El dilema del omnívoro*, el clásico sobre la industrialización y la globalización de la comida. Por eso, lo que está en juego en las protestas de los de ruana es mucho más que los precios de los fertilizantes. Lo que se define es el modelo de economía, sociedad y protección ambiental que queremos.

En cuanto al modelo económico, las protestas ponen en entredicho la convivencia de la agricultura con la locomotora minera. No es casual que una de las exigencias de Dignidad Cafetera sea limitar los títulos mineros en zonas de cultivo del grano. Ni que el paisaje cafetero, patrimonio de la Unesco, esté desapareciendo lote por lote. “Uno no vive del paisaje”, le dijo a *El Tiempo* un cafetero derrotado, dispuesto a vender su parcela a compañías mineras, o a ciudadanos acomodados que la conviertan en finca de recreo con piscina.

Cada economía engendra un tipo distinto de sociedad. Una cosa es la de los pequeños agricultores boyacenses o quindianos, con su pacifismo y autonomía. Otra muy distinta es la de los colonos de las zonas mineras y petroleras, o los jornaleros de las grandes extensiones de palma o cereales, con sus relaciones laborales feudales, controladas a menudo por ejércitos privados. El contraste es igual de marcado en la sociedad de consumo: una cosa es

comprar alimentos en plazas de mercado y ferias de pequeños productores que conservan sus semillas, y otra en supermercados de cadena que distribuyen los productos de las grandes compañías alimenticias.

Están en juego también formas distintas de regulación ambiental y ordenamiento territorial. De un lado, un modelo como el de Costa Rica, que privilegie las zonas ambientales protegidas y la agricultura sostenible, al tiempo que fomenta la innovación. De otro lado, el modelo extractivo y de monocultivos, como el de Brasil.

Todo lo cual depende de escogencias políticas. El Gobierno no termina de decidirse: amplía zonas protegidas como Chiribiquete, pero alienta la minería. No es gratuito que empresas como Cargill y Monsanto aparezcan cada vez más en las noticias, a medida que sus productos y semillas desplazan las de los campesinos.

Todo esto es lo que ponen sobre la mesa, literalmente, los protestantes de ruana. Y los que responden #YoMePongoLaRuana.

www.elespectador.com/opinion/yomepongolaruana-columna-442677